SECCIÓN: PRESIDENCIA
EXPEDIENTE: CDHEG-2VG/015/2024-IV
RECOMENDACIÓN: 021/2025
OFICIO NÚMERO: PLE-2119/2025
ASUNTO: Se informa la no aceptación de la recomendación.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 27 de agosto de 2025.

C. MTRA. CECILIA NARCISO GAYTÁN.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE GUERRERO.
P R E S E N T E.

Apreciable Maestra:

En respuesta al oficio 460/2025 de fecha 18 de julio de 2025, recibido en este Órgano Jurisdiccional a las 12 horas con 29 minutos del 12 de agosto de 2025, por medio del cual se notifica la Recomendación 21/2025 que dirige esa Comisión, le comunico que la misma **NO SE ACEPTA**; y tal y como se solicita en dicho instrumento recomendatorio, expongo la fundamentación y motivación de dicha negativa.

Previo a exponer los argumentos que motivan la presente, no se omite precisar que, con el objeto de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos referidos en la recomendación de mérito, este órgano jurisdiccional será

congruente en omitir su publicidad, aduciendo las claves realizadas por esa Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero¹.

Consideraciones previas

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero es la autoridad jurisdiccional especializada en materia electoral en el Estado, que tiene a su cargo proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía y garantizar que todos los actos y resoluciones electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana, así como los procesos democráticos que sean de su competencia, se sujeten a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, debiendo cumplir sus funciones con certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Este Tribunal, acorde a lo dispuesto en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, aplicando, consuetudinariamente, la perspectiva de género, la perspectiva intercultural y la perspectiva interseccional, contribuyendo al desarrollo de la vida democrática, sustanciando y resolviendo en forma definitiva e inatacable las controversias sometidas a su competencia.

¹ En adelante CEDHEG.

En términos de lo dispuesto por los artículos 5, 7, 8 y 12, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero número 457, el Tribunal Electoral del Estado funciona en **Pleno y en única instancia**, siendo **el Pleno el órgano máximo del Tribunal Electoral**, el cual se encuentra integrado por todas las Magistraturas.

A su vez, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica citada, la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado, preside el Pleno y tiene, entre otras atribuciones, la de representar al Tribunal, **vigilar que se adopten y cumplan las medidas necesarias para coordinar las funciones administrativas, rendir informes**, turnar al Órgano de Control Interno las quejas o denuncias presentadas en contra de servidores del Tribunal.

Por su parte, los artículos 4, 39 y 42 de la citada Ley Orgánica, disponen que el Tribunal Electoral funcionará como órgano colegiado con cinco miembros y para el ejercicio de la función jurisdiccional todas las magistraturas integran Ponencia, así **cada Magistrada o Magistrado estará a cargo de una Ponencia, contando con el personal jurídico y administrativo necesario para el ejercicio de sus atribuciones.**

Así, del contenido normativo citado, se advierte que, el órgano máximo del Tribunal Electoral es el Pleno del mismo, sin que, en forma alguna, de la normatividad se desprenda o faculte a la Presidencia del Tribunal a fin de asumir, por sí o en cumplimiento a un mandato, las funciones exclusivas del Pleno, las que son intransferibles.

Bajo ese contexto, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, este Tribunal al ser un órgano jurisdiccional autónomo e independiente, rige su actuar bajo altos estándares de constitucionalidad y legalidad, garantizando en todo tiempo, los derechos humanos de todas las personas; consecuentemente, acorde a su naturaleza y principios rectores, no puede regir sus actos o aceptar que por una recomendación, como en el caso, sus actos se sustenten en una serie de conjeturas, realizadas mediante un análisis débil y sesgado del material probatorio, alejándose con su actuar de los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad.

Máxime cuando se pretende que esta Presidencia desconozca u obvie que el Pleno de este órgano jurisdiccional aprobó el proyecto presentado por su Órgano de Control Interno que resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa, registrado bajo el número de expediente **TEE/OCI/PRA/06/2024**, instruido por esa autoridad interna, por la queja presentada por una persona (Q en la recomendación) por los mismos hechos y las mismas conductas², aplicando los estándares constitucionales y legales que llevó a determinar la inexistencia de las mismas y, en consecuencia, la no adecuación de las conductas a los supuestos de responsabilidad administrativa en contra del servidor público denunciado (SPR en la recomendación); en síntesis, mismas personas, mismos hechos y mismas conductas, variando únicamente la pretensión entre lo buscado con la queja en esa Comisión y la queja presentada en este Tribunal.

² Violencia de género por prejuicios, hostigamiento laboral y discriminación.

Fundamentos y motivos por los que no se acepta la recomendación.

A) El 18 de julio de 2025, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) emitió la Recomendación No. 021/2025, dirigida a este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, la cual le fue notificada el 12 de agosto del año en curso. Dicha Recomendación tiene su origen en hechos materia de una queja presentada por Q en contra de un servidor público de este órgano jurisdiccional, relacionada con el procedimiento de responsabilidad administrativa registrado bajo el expediente TEE/OCI/PRA/06/2024.

Cabe precisar que el mencionado procedimiento fue sustanciado, debidamente ventilado y resuelto con fecha 4 de diciembre de 2024, de manera **definitiva e inatacable** por el Órgano de Control Interno de este Tribunal, cuya resolución fue aprobada por el Pleno del mismo, en estricto apego a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y máxima publicidad, determinando la no existencia de responsabilidad administrativa alguna.

Los *Fundamentos jurídicos de la incompetencia de la CDHEG*. La emisión de la Recomendación en cita adolece de un vicio de origen insalvable: la incompetencia *ratione materiae* de la CDHEG para conocer del asunto, lo que la torna en un acto nulo de pleno derecho. Esta incompetencia se sustenta en un bloque de constitucionalidad y legalidad integrado por los siguientes ordenamientos:

- La *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. El artículo 102, Apartado B: Dispone de manera taxativa que los organismos de

protección de los derechos humanos “no serán competentes tratándose de **asuntos electorales y jurisdiccionales**”. Este mandato constitucionales claro e imperativo, y establece una limitante infranqueable a la actuación de la CDHEG.

- La *Ley de la comisión nacional de los derechos humanos*. El artículo 7, Fracción I: Refuerza el principio constitucional al establecer que la CNDH (y por interpretación jurisprudencial y sistemática, los organismos locales) no podrá conocer de los “**actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales**”.
- La *Ley número 696 de la comisión de los derechos humanos del Estado de Guerrero*. El artículo 17, Fracciones I y III: La propia ley orgánica de la CDHEG es terminante al ordenarle abstenerse de intervenir en casos de “Sentencias definitivas y en cuestiones jurisdiccionales de fondo” y en “Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales”. La CDHEG, al emitir la recomendación, violó flagrantemente su propia ley.

La naturaleza jurídica del Tribunal Electoral y del acto materia de queja: doble incompetencia. El acto que motiva la queja ante la CDHEG es de una naturaleza jurídica específica que lo coloca fuera de cualquier posibilidad de escrutinio por parte de un organismo no jurisdiccional.

- La *incompetencia por materia electoral*. Este Tribunal Electoral es un organismo constitucional autónomo especializado en la materia, cuya función esencial, derivada de los artículos 41 y 116 de la Constitución

Federal y 132 de la Constitución local, es ser el máximo intérprete y garante de la legalidad de los actos y procesos electorales en el estado.

Cualquier acto emanado de él, sus resoluciones administrativas internas, es inherentemente electoral por conexión.

- La *incompetencia por materia jurisdiccional/cuasi-jurisdiccional*. El procedimiento de responsabilidad administrativa (PRA) resuelto por el Órgano de Control Interno y avalado por el Pleno del Tribunal, no es un mero acto administrativo. Es un procedimiento garantista, reglado, que implica la sustanciación de un juicio interno, la valoración de pruebas, la audiencia de las partes y la emisión de una resolución motivada y definitiva. Estas características lo dotan de un carácter jurisdiccional o cuasi-judicial innegable. Permitir que un organismo administrativo (la CDHEG) revise lo resuelto (porque de facto así lo hace) en un procedimiento de esta índole, viola el principio de cosa juzgada y la autonomía de la función jurisdiccional y de control interno de este Tribunal.

Los *principios jurídicos vulnerados por la recomendación*. Esto tiene que ver con la intromisión de la CDHEG pues no sólo viola normas expresas, sino principios rectores del Estado de derecho:

- *Principio de Seguridad Jurídica*: La resolución del PRA generó un estado de certeza jurídica para las partes. La recomendación busca alterarlo, creando inseguridad e imprevisibilidad.

- *Separación de Poderes y Autonomías*: La CDHEG, un organismo autónomo de naturaleza administrativa, intenta fiscalizar y revisar el fondo de una resolución de otro organismo autónomo de naturaleza jurisdiccional-electoral. Esto quebranta el equilibrio institucional.
- *Cosa Juzgada*: El procedimiento interno se agotó y produjo una resolución firme. La CDHEG intenta, mediante una recomendación, reabrir el caso y sustituir el criterio del órgano competente por el suyo propio.

Así como **CONCLUSIÓN**, con lo anterior, se deja constancia de que:

- La CDHEG es **INCOMPETENTE** por carecer de jurisdicción para conocer del asunto que la motivó.
- La Recomendación No. 021/2025 deviene de una incompetencia insalvable.
- La Recomendación es **INATENDIBLE** por contravenir mandatos constitucionales, legales y principios fundamentales del orden jurídico mexicano.
- Su emisión constituye una **INTRUSIÓN ILEGÍTIMA** en la esfera de autonomía y competencia exclusiva de este Tribunal Electoral.

B) De igual forma, el motivo de la no aceptación, tiene que ver con la naturaleza de la CEDHEG, esto es, su concepción como órgano público autónomo de protección de derechos humanos. Se trata de un órgano que, aunque sus

recomendaciones no son imperativas, tiene el deber inexcusable de ajustarse a parámetros de regularidad constitucional y legales.

Si se acepta este diseño constitucional, entonces resulta indiscutible que, en los procedimientos de investigación y recomendación que desarrolla, se debe ajustar a un grupo mínimo de garantías procesales de todas las partes; esto implica actuar de manera profesional, objetiva y razonable.

Entonces, bajo esta lógica de respaldo constitucional, es que sus determinaciones aun cuando *prima facie* (en apariencia) no son coercitivas, en los hechos si tienen plenos efectos jurídicos, ya que, no obstante que “recomiendan” ciertas cuestiones, en realidad se trata de órdenes de hacer, no hacer, o cumplir, las cuales, en el caso de no ser aceptadas por las autoridades, **aperturan un procedimiento de carácter político-acusatorio de consecuencias jurídicas concretas importantes.**

De manera que, resulta incontrovertible que dichas recomendaciones tienen, bajo su propia lógica, un carácter imperativo; por esta razón la CDHEG tiene el deber de ajustarse a parámetros mínimos de regularidad constitucional y legal, por mencionar los más relevantes, **fundar y motivar, blindar los derechos procesales de todas las partes, ajustarse a los principios de objetividad, razonabilidad, constitucionalidad y legalidad.**

En el caso concreto, el procedimiento instruido contra un servidor del Tribunal Electoral, denominado en la recomendación como SPR, no se ajustó a los parámetros mínimos antes esbozados, lo que contraría, se contrapone y es

diametralmente opuesto con lo resuelto por este órgano jurisdiccional en la sentencia de fecha 4 de diciembre de 2024 en el expediente **TEE/OCI/PRA/06/2024**, y no obstante que esa CDHEG considere que con esa sentencia no se desvirtúan los hechos investigados por ese Organismo Público ya que se trata de procedimientos diferentes y con finalidades distintas, pues en el procedimiento de responsabilidad administrativa se analizó si SPR incumplió con sus obligaciones como servidor público, mientras que en el procedimiento de la CDHEG se analizó si se vulneró los derechos humanos de Q; así como que las pruebas desahogadas fueron distintas, ya que en el procedimiento de responsabilidad no se desahogó la testimonial de T1, ni la valoración psicológica; es menester reiterar que si bien la vía y la pretensión en ambos procedimientos son diversos, el procedimiento de responsabilidad administrativa se inició por la queja presentada por una persona (Q en la recomendación) por los mismos hechos y las mismas conductas, en la que se analizó en principio, por parte de este Tribunal, la existencia o no de violencia de género por prejuicios, posteriormente, la existencia o no de hostigamiento laboral y, finalmente, la existencia o no de discriminación por orientación sexual, y, en el caso de encontrarse acreditada la existencia de alguna conducta, resolver si esta se adecuaba a los supuestos de responsabilidad administrativa, previstos en la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.

Sin que, bajo los estándares constitucionales y legales, pueda suponerse como hace y pretende esa CDHEG que, el desahogo de un testigo singular y una valoración psicológica, puedan, en principio, permitir volver a juzgar las conductas y, como se analizará posteriormente, que tales probanzas, bajo los

parámetros de constitucionalidad y legalidad del sistema probatorio, hubiesen cambiado el sentido de la determinación.

Asimismo, la CDHEG omite señalar en la recomendación formulada a esta Presidencia del Tribunal, que ya me pronuncié respecto de las conductas materia de queja, cuya determinación fue en sentido contrario al sostenido por la Comisión, sin que pueda por mí misma variar dicha determinación, ya que la resolución fue emitida por el Pleno y la suscribí como integrante del mismo.

De ahí, **la no aceptación de la recomendación.**

Ahora bien, con el propósito de evidenciar que la motivación de la recomendación se contrapone a la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, y no reúne los parámetros mínimos jurídicos (deficiente en los hechos probados, pruebas valoradas y normas aplicadas con razonamientos claros, lógicos y congruentes) para que este Tribunal deje de conducirse bajo estándares constitucionales y legales como se le recomienda, expongo lo siguiente.

A partir del contenido de la recomendación, la fundamentación y motivación de la no aceptación que desarrollaré en este apartado, será en cuatro ejes fundamentales: **Primero.** Obligación ineludible de la CEDHEG de fundamentar y justificar sus actos y resoluciones; **Segundo.** Parámetros mínimos de valoración probatoria; **Tercero.** Garantías mínimas de los imputados; y **Cuarto.** Transgresiones (concretas) procesales y de fondo de la recomendación.

Primero. Obligación ineludible de la CEDH-GRO de fundamentar y justificar sus actos y resoluciones.

I. Marco jurídico aplicable.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

Este precepto básico constitucional impone una obligación universal a toda autoridad, cualquiera que sea su naturaleza —incluidos los organismos públicos autónomos—, de fundar y motivar sus actos. Fundar implica señalar con precisión las disposiciones jurídicas aplicables y motivar implica exponer de manera clara, lógica y congruente las circunstancias y razones particulares que llevaron a emitir el acto, determinación o resolución.

II. Aplicación del artículo 16 Constitucional a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), como organismo público autónomo, es autoridad para efectos del artículo 16 constitucional. -Aunque sus recomendaciones no tengan fuerza coercitiva directa-, **eventualmente si producen efectos jurídicos y fácticos relevantes,**

como la obligación de las autoridades destinatarias de responder formalmente y el impacto en la imagen institucional; y ante rechazo de una recomendación, se apertura un procedimiento político-acusatorio.

Dada esta naturaleza, las recomendaciones no pueden emitirse de forma arbitraria y deben cumplir con el estándar constitucional de fundamentación y motivación.

III. Marco legal local y supletorio

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, establece que las recomendaciones **deben emitirse de manera clara, precisa y con sustento jurídico**. De esta manera, **aunque no reproduzca literalmente la frase 'fundar y motivar', esta exigencia equivale a dicha obligación en términos constitucionales.**

En lo no previsto, es aplicable supletoriamente la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo artículo 46 dispone que, cuando una autoridad no acepte o no cumpla una recomendación, deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, facultando al organismo para valorar la suficiencia de dicha motivación.

Esto presupone que la recomendación debe estar construida sobre hechos probados, pruebas valoradas y normas aplicadas con razonamiento jurídico claro.

Bajo esas directrices, -por la trascendencia que implica en el caso- es necesario fijar un grupo de principios y lineamientos que son inexcusables en el actuar de la CDHEG, y **que derivan literalmente de su Ley:**

i) Aplicación normativa general (a todas las personas por igual).

Que deriva del artículo 4; a la letra reza: *“En el ejercicio de su actividad, la Comisión deberá interpretar los derechos humanos en la forma más beneficiosa para las personas, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Federal, Local y los Tratados Internacionales en la materia.”*

ii) Ajuste absoluto a los principios de la función.

Lo que se establece en el diverso numeral 5; que señala: *“Los integrantes de la Comisión, **deberán observar como principios rectores de su actuación los de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, eficiencia, racionalidad presupuestaria, profesionalismo, responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, así como aquellos principios consustanciales a su específica función.**”*

iii) Defender la aplicación exacta de formalidades esenciales procedimentales.

Lineamiento que deriva del artículo 64; que refiere: *“Los procedimientos de la Comisión deberán ser breves, sencillos, y estarán sujetos sólo a formalidades esenciales que requiera la documentación de los*

expedientes respectivos; seguirán además los principios de buena fe, inmediatez, concentración y rapidez.”

iv) Igualdad procesal.

Principio que refiere que las partes del procedimiento tienen igualdad de oportunidades para ofertar pruebas. Lo cual está anotado en el dispositivo 86; que a la letra reza: **“Los interesados podrán ofrecer toda clase de pruebas y la Comisión podrá recabarlas de oficio, siempre que no fueren contrarias ni a la moral, ni al derecho.”**

Lo que implica -de manera natural y lógica- que, si ambas partes gozan de la misma oportunidad y apertura en cuanto al tema probatorio, existe el compromiso legal (ineludible) de la autoridad recomendante al emitir la resolución final de **justipreciar, engarzar, y otorgar el valor probatorio al universo de pruebas obrantes en el expediente, y no de solo una de las partes.**

Aserto que se corrobora con el diverso artículo 88, que marca: **“Durante el periodo probatorio, las partes podrán formular las consideraciones y razonamientos que conforme a derecho y a sus intereses correspondan.”**

Sobra decir que, del lineamiento anotado, se infiere de manera automática **la obligación de la CDHEG, de analizar y valorar todas las consideraciones y razonamientos presentados por las partes del procedimiento y no solo una de ellas.**

v) Estricta valoración probatoria

Al efecto, el artículo 89 señala que: *“Las pruebas serán valoradas por el Visitador General, de acuerdo con los principios de la **lógica, la sana crítica, la experiencia y la legalidad**, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja o denuncia.”*

Como se ve, respecto al principio general de **estricta valoración probatoria**, la propia norma aplicable de la CDHEG, lo prevé como un eslabón forzoso en la conclusión del procedimiento atinente.

vi) Asignación de valor al universo probatorio y conclusión.

Finalmente, el artículo 90, establece lo siguiente: *“Concluido el término probatorio y de investigación, **el Visitador formulará el proyecto de resolución, en el que se analicen los hechos reclamados, los informes de las autoridades, los resultados de las investigaciones practicadas en su caso, y la valorización de pruebas que hubieren sido ofrecidas** a efecto de determinar, si en su opinión, se cometió o no una violación a los derechos humanos.”*

“De no comprobarse la violación de derechos humanos se dictará el acuerdo respectivo. Se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución, compensación, satisfacción, y reparación de los daños que se

hubieren producido en base a los estándares y elementos establecidos en la Ley General de Víctimas y otras normas aplicables.”

En ese orden, la Ley General de Víctimas, también establece principios y lineamientos de cumplimiento forzoso para la CDHEG, como se ve enseguida:

vii) Aplicación general (a todas las personas) de la norma de mayor beneficio.

Principio mencionado en el artículo 5, que a la letra dispone: *“Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:*

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.”

Bajo esa línea de principios y normas, es natural observar que el procedimiento ante la CDHEG para la investigación de hechos, **no está exento de las formalidades esenciales de todo proceso que culmina con una resolución.**

Como se pudo advertir, la CDHEG en cada una de las etapas que desarrolla en la investigación, **tiene el deber ineludible de ajustarse a parámetros de**

regularidad constitucional y legal, que para el caso son las formalidades esenciales de todo proceso o procedimiento.

IV. Jurisprudencia y criterios relevantes.

Para robustecer mi posición sobre la obligación de la CDDH de ajustarse a normas procesales mínimas, a continuación, procedo a mencionar algunos criterios de la SCJN y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que corroboran la no aceptación a la recomendación que ahora fundo y motivo.

1. Tesis aislada SCJN I.3o.A.60 A (10a.): Determina que **cualquier acto que contenga imputaciones o señalamientos que afecten la reputación de una persona, aun sin sanción directa, debe estar debidamente fundado y motivado para no vulnerar la seguridad jurídica.**

2. Jurisprudencia de la SCJN sobre el artículo 16 constitucional: **Reitera que la falta de fundamentación o motivación constituye una violación directa a la Constitución.**

3. Caso Almonacid Arellano vs. Chile (Corte IDH, 2006): **Establece que toda autoridad interna debe garantizar el derecho al debido proceso, incluyendo la obligación de emitir decisiones motivadas.**

V. Principio de transparencia y rendición de cuentas.

Por otro lado, el artículo 1º constitucional, en relación con el artículo 102, apartado B, obliga a los organismos públicos de derechos humanos a actuar con **objetividad, imparcialidad y transparencia**. **La motivación y fundamentación de las recomendaciones es indispensable para garantizar que el procedimiento sea verificable, evitar arbitrariedades y permitir que la sociedad evalúe la solidez del pronunciamiento.**

Efectos de la omisión

En ese orden de razones, en el caso, la omisión de fundar y motivar adecuadamente la recomendación por parte de esa CDHEG:

- 1. Vulnera el derecho a la seguridad jurídica.** Lo cual, desarrollaré puntualmente en un apartado posterior de esta negativa.

- 2. Limita el derecho de defensa al impedir conocer de manera precisa las razones del pronunciamiento.**

- 3. Afecta la credibilidad institucional de la CEDHEG.**

- 4. Es motivo de impugnación mediante los medios de defensa constitucional y legal correspondientes.**

Bajo esa tesitura, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero está obligada, por mandato constitucional, legal e internacional, a fundar y motivar sus recomendaciones.

Esto implica relatar de manera precisa los hechos probados, incorporar la valoración de las pruebas, citar las normas jurídicas aplicables y exponer el razonamiento lógico que une los hechos con el derecho.

De esta forma se cumple con los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, salvaguardando la seguridad jurídica de las autoridades o servidores públicos involucrados, situación que, en el caso no se advierte.

Segundo. Parámetros mínimos de valoración probatoria.

Como quedó sentado líneas atrás, la CEDHEG debe observar en sus procesos y recomendaciones los parámetros mínimos de fundamentación y motivación, de esto se sigue entonces que, en la admisión, desahogo y valoración probatoria tiene que ajustarse a reglas elementales, como enseguida se señalan.

I. Obligación de legalidad

Se debe atender a la normatividad procesal aplicable para admitir, desahogar y valorar las pruebas. Una prueba obtenida de manera ilícita o en contravención de los derechos humanos carece de valor jurídico. Esto deriva del artículo 14 Constitucional y del principio de exclusión de prueba ilícita.

II. Obligación de imparcialidad.

Se deben valorar las pruebas sin prejuicios, sesgos, ni favoritismos, con base únicamente en lo que obra en el expediente. La imparcialidad es indispensable para garantizar un juicio justo, conforme al artículo 17 Constitucional y Tratados Internacionales.

III. Obligación de exhaustividad.

Se debe valorar la totalidad de las pruebas admitidas y desahogadas, sin omitir ninguna relevante. El no hacerlo constituye violación al principio de exhaustividad y causal de nulidad del resultado.

IV. Obligación de motivación y fundamentación.

Toda resolución debe explicar cómo y por qué cada prueba fue valorada de determinada manera, conforme al artículo 16 Constitucional. La ausencia de motivación implica violación al debido proceso.

V. Obligación de observar las reglas de la carga de la prueba

Se deben respetar las reglas de quién tiene la carga probatoria, salvo en casos especiales (laboral, género, derechos humanos) donde puede invertirse para proteger a la parte más vulnerable, lo cual no implica desconocer las reglas de la valoración probatoria. En el presente caso, se menciona la reversión probatoria en contra de SPR, sin embargo, como se advierte no se llevaron a cabo los estándares de valoración de sus pruebas.

VI. Obligación de congruencia.

La valoración probatoria debe guardar relación directa con los hechos controvertidos. El encargado de juzgar no puede fundar su decisión en hechos distintos a los planteados en la litis.

VII. Obligación de aplicar la sana crítica

La valoración probatoria debe realizarse bajo principios de lógica, experiencia y ciencia. El juzgador debe explicar de forma clara y precisa cómo llegó a su convicción, evitando decisiones arbitrarias.

VIII. Obligación de proteger los derechos humanos.

La valoración de la prueba debe realizarse con respeto a los derechos humanos, aplicando el principio *pro persona* y la interpretación conforme. Esto exige ponderar pruebas que impliquen posibles actos de discriminación o desigualdad.

IX. Efectos de la omisión de observar los parámetros mínimos de valoración probatoria.

Bajo ese contexto, la función de juzgar en cualquier rama del Derecho exige que, al analizar y valorar las pruebas, se actúe con plena observancia de los principios constitucionales y procesales. El respeto a la legalidad, imparcialidad,

exhaustividad, congruencia, motivación, sana crítica y derechos humanos constituye la base para garantizar un proceso o procedimiento justo y confiable. En el caso, la valoración probatoria debió ajustarse a reglas elementales, la omisión de cualquiera de estas obligaciones no solo afecta la validez de la resolución, sentencia, o en como en el caso, la recomendación, sino que vulnera directamente el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso de las partes.

Tercero. Garantías mínimas de los imputados.

I. Marco normativo y jerarquía.

El Estado mexicano es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos³ (CADH), ratificada el 24 de marzo de 1981. Conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos contenidos en tratados internacionales tienen rango constitucional y deben aplicarse directamente.

Asimismo, el artículo 133 constitucional establece la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales sobre leyes federales y locales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la tesis aislada P. IX/2011 y en la contradicción de tesis 293/2011, reconoció la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, imponiendo a todas las autoridades el deber de ejercer control de convencionalidad.

³ En adelante CADH.

II. Presunción de inocencia.

El artículo 8.2 de la CADH establece: 'Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia **mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.**

Este derecho implica que la carga de la prueba recae en la parte acusadora, salvo excepciones, y que toda duda razonable debe resolverse a favor del imputado.

En el Caso Tibi vs. Ecuador (2004), la Corte IDH sostuvo que **la presunción de inocencia obliga al Estado a abstenerse de emitir pronunciamientos o adoptar medidas que traten al imputado como culpable antes de una sentencia firme. Asimismo, implica la obligación de garantizar un proceso con respeto pleno a las garantías judiciales.**

III. Derecho a la defensa y asistencia jurídica.

El artículo 8.2.d de la CADH dispone que toda persona tiene derecho a 'defenderse personalmente o de ser asistida por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor'. Si no designa defensor, el Estado debe proveer uno de oficio de manera gratuita.

En el Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala (2005), la Corte IDH determinó que

el derecho a la defensa es irrenunciable y debe garantizarse desde el primer acto del proceso, incluyendo la etapa de investigación.

Este derecho, **incluye la obligación de la autoridad de pronunciarse** en la resolución, sentencia, acto, o como en el caso recomendación, sobre las pruebas y las defensas del sujeto imputado, porque ningún fin práctico tendría otorgar la oportunidad de defensa en el proceso o procedimiento, si finalmente no se valora dicha defensa, alegatos y pruebas.

IV. Derecho a ser informado de la acusación.

El artículo 8.2.b de la CADH señala que el imputado tiene derecho a 'ser informado sin demora, en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación'. Esto permite preparar adecuadamente la defensa.

En el Caso Barreto Leiva vs. Venezuela (2009), la Corte IDH enfatizó que esta notificación debe ser clara, precisa y comprensible, y entregarse en un idioma que el imputado entienda.

Lo cual, en el caso se transgredió en perjuicio del sujeto imputado SPR, ya que, durante la secuela procedimental, se dieron una serie de violaciones graves por parte de funcionarios de la CDDH, como fueron la sustracción y cambio de actuaciones.

V. Derecho a ser juzgado sin dilaciones debidas.

El artículo 8.1 de la CADH reconoce el derecho a ser oído 'con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable'. En el Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua (1997), la Corte IDH señaló que el plazo razonable se evalúa considerando: i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado, y iii) la conducta de las autoridades judiciales.

VI. Principio de legalidad y proporcionalidad penal.

El artículo 9 de la CADH recoge el principio de legalidad: 'Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable'. En el Caso Kimel vs. Argentina (2008), la Corte IDH estableció que este principio exige leyes claras, precisas y preexistentes, que brinden seguridad jurídica y previsibilidad.

VII. Prohibición de penas crueles o inhumanas.

El artículo 5.2 de la CADH prohíbe la imposición de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago (2005), la Corte IDH declaró que esta prohibición es absoluta y no admite limitaciones ni en situaciones de emergencia.

Al caso, resulta relevante este principio internacional, pues la CDHEG en la recomendación que no se acepta, pide que se reconozcan los hechos y la aceptación de responsabilidad;

VIII. Obligación de control de convencionalidad.

En el Caso Almonacid Arellano vs. Chile (2006), la Corte IDH determinó que todos los jueces nacionales, como parte del Estado, están obligados a ejercer control de convencionalidad de oficio, verificando la compatibilidad de las normas y actos internos con la CADH y la jurisprudencia interamericana.

Omisión de la inaplicación de los principios básicos anotados.

Todo lo expuesto adquiere relevancia en el caso, porque con la recomendación que no se acepta, se advierte que la CEDHEG vulneró, lo siguiente:

1. No reconoció la aplicación directa de los precedentes de la CADH y, en consecuencia, no garantizó la aplicación directa de los derechos previstos en sus artículos 7, 8, 9 y 5.

2. No adoptó las medidas necesarias para salvaguardar la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, y el principio de legalidad.

3. Lo más grave, se recomienda que en mi calidad de Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, **reconozca y acepte los hechos y la**

responsabilidad; lo cual se equipara a una incriminación del SPR, trasgrediendo las garantías mínimas en su favor⁴ y, en consecuencia, desconozca implícitamente la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral.

Transgresiones que hago visibles concretamente en el siguiente apartado de mi no aceptación.

Derecho del Imputado	Fundamento en la CADH	Jurisprudencia de la Corte IDH
Presunción de inocencia	Art. 8.2 CADH	Caso Tibi vs. Ecuador (2004)
Derecho a ser informado de la acusación	Art. 8.2.b CADH	Caso Barreto Leiva vs. Venezuela (2009)
Tiempo y medios para preparar la defensa	Art. 8.2.c CADH	Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala (2005)
Defensa por abogado de elección o público	Art. 8.2.d CADH	Caso Ruano Torres y otros vs. El Salvador (2015)
Asistencia gratuita de intérprete	Art. 8.2.a CADH	Caso Landaeta Mejías Brothers vs. Venezuela (2014)
Interrogar testigos de cargo y descargo	Art. 8.2.f CADH	Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile (2014)
No autoincriminación	Art. 8.2.g CADH	Caso Vélez Loor vs. Panamá (2010)
Juicio sin dilaciones indebidas	Art. 8.1 CADH	Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua (1997)
Juicio público	Art. 8.5 CADH	Caso Aritz Barbera y otros vs. Venezuela (2008)
Libertad personal y control judicial	Art. 7.1, 7.2, 7.5 CADH	Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador (2007)
Prohibición de detención arbitraria	Art. 7.3 CADH	Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras (2003)
Revisión periódica de prisión preventiva	Art. 7.5 CADH	Caso Bayarri vs. Argentina (2008)
Principio de legalidad penal	Art. 9 CADH	Caso Kimel vs. Argentina (2008)
Proporcionalidad de la pena	Art. 5 y 9 CADH	Caso Mendoza y otros vs. Argentina (2013)
Prohibición de penas crueles o inhumanas	Art. 5.2 CADH	Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago (2005)

⁴ Derechos de una Persona Imputada en el Sistema Interamericano. Este cuadro comparativo presenta los derechos fundamentales de una persona imputada por un delito en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cuarto. Transgresiones (concretas) procesales y de fondo de la recomendación.

Por su relevancia al recomendarse a este tribunal, la aceptación de los hechos y la responsabilidad, es conveniente precisar porque se considera que tal determinación es contraria al procedimiento ya judicializado y resuelto, y contrario a los estándares de legalidad con que este órgano jurisdiccional rige su actuar y el cual se pretende contrarie con la aceptación de la recomendación.

- I. Los hechos declarados por la persona denunciante identificada como Q, son genéricos, ya que no señalan y acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar; salvo en un hecho del que, sin embargo, hay una contradicción evidente entre lo dicho por Q y su testigo singular T1.**

De una lectura a la recomendación se advierte que los hechos denunciados pueden considerarse afirmaciones vagas, genéricas e imprecisas; y, no obstante, la CEDHEG los estudió de manera grupal, sin realizar un estudio detallado y serio de cada una de las afirmaciones, esto es, de cada hecho, como en cualquier rama del derecho.

Esta irregularidad la llevó a concluir de manera errónea que todos los hechos de Q, estuvieran acreditados con el testimonio singular de T1.

En ese tenor, basta revisar la parte atinente de la recomendación, donde se transcribe la queja, que, en síntesis, es lo siguiente:

La persona quejosa hace valer que desde el 22 marzo del 2023 iniciaron las agresiones en su contra, -enseguida narra una serie de circunstancias genéricas, e imprecisas toda vez que no señala circunstancias de tiempo, modo y lugar-. Que, a partir de ahí, el trato fue desigual, incrementado la violencia y discriminación; que el denunciado abusaba de su poder asimétrico excluyéndolo de las actividades laborales; que dicha actitud se volvió más frecuentes a principios del 2024, pues el denunciado se dirigía a él de forma cortante y lo invisibilizaba por completo; que, en los últimos días de abril del 2024, vivió la experiencia más hostil y estresante de violencia y discriminación, pues boicoteaba su trabajo, no leía sus propuestas.

El único hecho concreto, es el que refiere que el **seis de mayo del 2024, a las 10:00 horas**, delante de sus compañeros SPR le gritó a Q de manera agresiva que ya llevaba tres años ahí y no sabía hacer un acuerdo, etc; y que por ello presentó su renuncia el dieciséis siguiente, ya que fue persistente en sus agresiones. (hecho que analizará líneas adelante)

Como se puede advertir de los textos, la declaración de hechos en la que se sustenta la CEDHEG para emitir la recomendación, está basada en circunstancias genéricas, vagas e imprecisas, con lo cual no da la oportunidad de realizar un pronunciamiento puntual en cada afirmación.

II. La decisión (recomendación) se sustenta en un testigo singular, y en mensajes de una red privada de comunicación.

Respecto de la testigo T1, de entrada, debe resaltarse que se trata de **un testigo singular**, y es conocido en Derecho que el ateste de un solo testigo, no hace prueba plena.

Así en su ateste, la persona T1 realiza una declaración que contiene **generalidades, imprecisiones y vaguedades**; y, sin embargo, se le otorga valor probatorio pleno (así se infiere porque expresamente no se señala el valor probatorio dado), advirtiéndose que tiene **una contradicción evidente (adelante la resaltaré) y existe una descontextualización del testimonio por parte de la CEDHEG para otorgarle a ese valor.**

En cuanto a los mensajes de la red privada de comunicación WhatsApp incorporados como medio de prueba en el procedimiento, debió considerarse si **era posible legalmente valorarlos al tratarse de mensajes privados**, y, sin embargo, fueron desahogados en el procedimiento e hicieron, a consideración de esa Comisión, prueba plena.

Al respecto, debió valorarse que no bastaba que Q los ofreciera como prueba en el procedimiento, sino que, al tratarse de mensajería privada, en este caso de **un grupo de personas empleadas y compañeras de Q y SPR**, era necesario que todas las personas integrantes del grupo expresaran su conformidad de hacerlos públicos en el procedimiento. En este sentido, se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al desechar este tipo de pruebas, al ser allegadas al expediente de manera ilegal, como fue en este caso.

Ello porque los aludidos mensajes privados gozan de la protección a la privacidad, y para incorporarlos vía prueba de hechos, era absolutamente necesario que obrara la aceptación pública de los que en dicho grupo participaban.

No obstante, independientemente a lo anterior, del contenido textual de dichos mensajes **no se advierte, ninguna situación de discriminación o discriminación por orientación sexual, acoso, hostigamiento o violencia;** por el contrario, se indica que se está reconociendo a los compañeros que participaron en ciertas actividades de la ponencia.

La CEDHEG para contextualizar las supuestas conductas de discriminación, **supone** que, en los mensajes, toda vez que SPR omite referirse a Q, entonces no lo consideraba del equipo de trabajo.

Ahora bien, en una investigación acorde a la legalidad, sin sesgos, ni suposiciones, con certeza y seguridad jurídica, la CDHEG habría advertido que acorde a sus funciones y atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, al interior de las ponencias del Tribunal Electoral del Estado, por la carga de trabajo en proceso e interproceso electoral la persona titular de la ponencia integra grupos de trabajo, y por ello, cada grupo se completa con diversas personas servidoras públicas, de esta manera el hecho de que, en su caso, a Q no se le mencionara en tal conversación privada, en automático no significaba que se le estuviera excluyendo, como equivocadamente y sin justificar se determina en la recomendación.

Ahora bien, sobre el contenido de los hechos genéricos narrados por Q, T1, así también los refiere, esto es, de manera vaga, genéricos e imprecisos. **Además, de que agrega una serie de circunstancias que no fueron señaladas por Q en ninguno de sus planteamientos genéricos.**

En ese sentido, para demostrar lo inválido de la persona testigo singular, basta señalar que, sobre el hecho narrado por Q, en el que si señala una fecha y hora en que supuestamente aconteció, (único hecho concreto) esto es, **6 de mayo del 2024**, “gritos de manera agresiva”, la persona testigo T1, **señala una fecha totalmente diferente en la que supuestamente sucedió, esto es: “en el mes de abril del 2024”.**

Con lo cual, por la generalidad, imprecisión, narrativa distinta, ajena y ampliada, la CDHEG, no debió otorgar ningún tipo de valor probatorio a dicho testimonio singular, en cambio le da valor probatorio pleno.

- III. Respecto a los testigos ofertados por SPR, les desestima su valor porque -según se narra- amplían los hechos y hay relaciones de subordinación; sin embargo, justamente lo mismo sucede en el caso del testigo del denunciante T1 (amplia los hechos) y, sin embargo, si se le otorga el valor probatorio pleno.**

En principio, sobre este punto la recomendación establece **unilateralmente que hay una posición de superioridad y asimetría de poder de SPR hacia Q**, porque pudo ofrecer a su favor seis testimonios de compañeras y compañeros y Q solo pudo ofrecer el testimonio de T1, una vez que dejó formar parte del

Tribunal, y por ello, -según narra la recomendación- traslada la carga de la prueba de los hechos a SPR y basado en ello, afirma que éste no acreditó o desvirtuó las manifestaciones de Q; **y, para llegar a esta afirmación, la CEDHEG no otorga ningún tipo de valor probatorio a las pruebas ofertadas por SPR, ni aun en grado indiciario.**

Al respecto, resulta subjetivo y erróneo la afirmación de la CEDHEG de que la posibilidad de ofrecer un mayor número de pruebas o testimonios deriva en una asimetría de poder porque se cuenta con mayor facilidad para probar, en el caso, la CEDHEG tendría que justificar si contrario a ello, las personas rinden testimonio porque conocen y les constan los hechos y el contexto de estos, o quizá será que tan solo es una justificación temeraria para invertir la carga de la prueba.

En efecto, la recomendación reconoce que SPR ofertó un grupo importante de medios de pruebas, como fueron placas fotográficas, testimonios, informe de autoridad, copias de un procedimiento de responsabilidad administrativa de Q ante el IEPCGRO, la sentencia dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa incoado en su contra por Q; no obstante, fuera de toda lógica jurídica, la recomendación desestima las pruebas que valoró parcialmente, bajo el débil e ilegal argumento: **“ello no desvirtúa los señalamientos”**, sin establecer técnica y objetivamente **una argumentación fundada y motivada sobre los motivos de por qué no valora los medios de prueba de SPR.**

Sobre los testigos de descargo, T1, T2, T3, T4, T5, T7, la recomendación de la CDHEG les niega todo valor probatorio, esto es, no les otorga ningún tipo de

valor probatorio, porque -señala- amplían los hechos más allá de lo dicho por Q y SPR, no obstante, en principio, los atestes abiertos se ofrecieron por parte de SPR para desvirtuar los hechos, genéricos que, se señaló carecían de circunstancias de modo, tiempo y lugar.

A partir del ateste de un testigo singular (T1), da por cierto la reproducción de una canción homofóbica, “negándole” valor probatorio a los 6 testimonios ofrecidos por SPR, al señalar que van más allá de lo expresado por éste en su defensa, atestes que, de forma coincidente y congruente, desvirtúan el hecho y el testimonio singular.

Sobre la defensa y testimonios relativos al hecho (acreditado) de que Q no se había auto adscrito de la comunidad LGBTTTIQ+, la resolución dice simplemente que era innecesario e irrelevante, sin motivar con suficiencia tal determinación.

En el caso, se estableció y acreditó por SPR, que Q ya tenía circunstancias traumáticas previas por las cuales estaba recibiendo apoyo psicológico, sin embargo, la recomendación lejos de valorar dichas circunstancias probadas, las tomó como una revictimización; circunstancia que, sobra decir, en la recomendación tampoco funda y motiva, cuando es de explorado derecho que los argumentos vertidos en una defensa no pueden ser considerados como una revictimización sino como parte argumentativa de la misma.

Por otro lado, T7 reafirmó en el procedimiento que Q ya tenía antecedentes de problemas psicológicos, y esto lo conocía por haber sido su compañero de

trabajo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; sin embargo, fuera de toda lógica, la recomendación solo señala que no tienen valor: **“porque son ajenos a los hechos de la queja”**.

Sin embargo, en la recomendación se da valor probatorio pleno al informe de valoración psicológica practicado a Q (así se infiere porque expresamente no se señala el valor probatorio dado), como si en realidad esta condición médica se hubiere generado a partir de los hechos declarados por Q en esta investigación. Por cierto, dicho peritaje solo refiere una situación actual de Q, pero de manera alguna su origen.

Aunado a que se establece que fue practicado -dice- es psicóloga de la Unidad de Peritos de esa CDHEH, no obstante, bajo las reglas probatorias dicho documento debe reunir las características (rigor metodológico) de una pericial, que soporten las observaciones y conclusiones que se plasman, caso contrario debe desestimarse. Aunado a ello, la psicóloga deberá de demostrar su expertis en el área de la psicología forense y seleccionar de forma detallada las pruebas que evalúen daño emocional en víctimas de mobbing o violaciones a los derechos de discriminación, en el caso, en la recomendación se omite motivar estos aspectos sustanciales para dar valor probatorio pleno a la valoración psicológica realizada en una sola entrevista.

En la recomendación se establece que, cuando SPR quita el aviso “sonríe te estamos vigilando” y expresa “ya estamos puros compas”, tal expresión la califica como discriminatoria por homofóbica y afirma, de acuerdo a la valoración

psicológica, tuvo un impacto negativo en Q; sin embargo, tal hecho fue narrado por T1 en su testimonio.

En ese orden de ideas, los testimonios descartados por la CDHEG, “negándoles valor probatorio” fue bajo el argumento de que van más allá de la defensa de SPR, por una parte, porque SRP no mencionó en su defensa, específicamente sobre la reproducción de la canción calificada como homofóbica (aunque sí negó los hechos) y, posteriormente porque dijeron -no todos- que el día en que renunció Q le hicieron un acto de despedida en el que SP1 le reconoció su trabajo y le desearon todo tipo de parabienes en sus nuevos proyectos.

No obstante, los atestes iban más allá porque pretendían acreditar, entre otros, que en el área del empleo había un ambiente de camarería; que Q y ningún otro empleado había sufrido discriminación ni violencia, que no se había reproducido la canción calificada de homofóbica. En otra parte, con los atestes se pretendía establecer que Q ya tenía una condición médica desfavorable previa a los hechos que narra, lo cual para la materia de los hechos era de medular trascendencia, porque acreditaba que el desequilibrio que padece Q, se generó en otro contexto.

Así también, la recomendación reconoce que SPR ofertó como prueba el informe de SP1, en el que se informó puntualmente que no había una relación de jerarquía en la oficina entre SPR y Q, ya que quien asignaba las cargas y revisaba los trabajos únicamente era la Magistratura titular de la ponencia, **informe que fue desestimado sin fundar y motivar**, y, de manera incongruente, le restó eficacia probatoria a una documental pública, al afirmar

que de facto SPR, si le revisaba el trabajo a Q, al advertir que en el rubro de 9 sentencias ofrecidas por Q, se especifica que SPR fue el secretario instructor y Q colaborador, lo cual implica que existiera de facto una superioridad sobre Q dado que el responsable del proyecto tenía que indicar y supervisar el trabajo que le encomendara a su colaborador.

Aseveración temeraria y desconocedora del trabajo, funciones y cargas laborales de las ponencias del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; en el caso, si con responsabilidad la CEDHEG hubiera realizado su investigación, sin desconocer el informe de autoridad, y sin realizar suposiciones o conjeturas no deducidas de documento idóneo, habría concluido que, de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y su Reglamento Interno, la indicación y supervisión de los trabajos en la proyección de los proyectos de sentencia son responsabilidad de la magistratura titular de la ponencia y no del secretario instructor y es ésta, quien asigna las tareas y supervisa el desarrollo de las mismas.

Incongruencias que, resultan graves cuando lejos de una justificación y motivación, la recomendación desestima todas las pruebas afirmando: (sin probar porqué) *“mientras que SPR, ofreció a su favor seis testimonios de compañeras y compañeros de trabajo, lo que evidencia una relación asimétrica de poder; sin embargo, atendiendo que la SCJN ha sostenido que el sistema de presunciones es adecuado para tener por probados los daños de difícil acreditación y es posible invertir la carga de la prueba...”*.

Sin embargo, surge la interrogante: ¿A cuáles presunciones se refiere la recomendación?, porque una prueba de contexto o prueba indiciaria requiere de la existencia de indicios más indicios más indicios y que estos se encuentren acreditados, en el caso, como he puesto en evidencia hasta ahora, no hay ninguna, más que la sola declaración de Q y el ateste de T1.

En ese sentido, la CDHEG pasa por alto -aunque lo reconoce- que **no se acreditó una relación asimétrica de poder**; así, los testigos de SPR son empleados de la propia oficina donde laborada Q, y por esa razón eran los únicos (idóneos) que conocían circunstancias reales del contexto y relaciones en dicho empleo; por lo que es un error grave y un exceso de imposible realización, afirmar que no son testigos idóneos, pues para el caso no existe otro contexto y personas que pudieran testificar sobre tales hechos.

Lo grave de este punto, es que sin ninguna técnica y menos objetividad, en el análisis y valoración probatoria, la CDHEG diga: *“por lo tanto, los medios de prueba aportados por Q, aun cuando son menos, administrados con los hechos narrados por Q, son suficientes para acreditar que en un contexto de normalización de las actitudes discriminatorias hacia la comunidad LGBTQQ+, SPR vulneró los derechos humanos a la igualdad y no discriminación (basada en la orientación sexual).*

De magnitud trascendente porque, como he venido argumentando, de los hechos referidos por Q, solo uno de ellos tiene la calidad de concreto, porque señala cómo, cuándo y dónde se realizó, sin embargo, su testigo de cargo T1, sobre ese hecho particular, **dice que se ejecutó en otra fecha**; los mensajes

privados de una red de comunicación que “apoyan” la actualización de tal hecho, **se incorporaron al procedimiento de manera ilegal**, y de su contenido no se advierte ningún acto discriminatorio en contra de Q,

Por lo que, hasta aquí puedo afirmar que la recomendación adolece de los mínimos estándares constitucionales y legales que debe contener toda decisión que pone fin a una investigación y ordena consecuencias para una de las partes.

IV. En cuanto a lo recomendado como medidas de protección, la recomendación es dirigida a mí, en calidad de Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral, sin embargo, no se justifica ni motiva en ninguna parte, porqué es en mi calidad de Presidenta a quien se ordena ofrecer una disculpa pública, se pide reconocer responsabilidad ante hechos de un particular, y lo más grave, se recomienda la aceptación de responsabilidad.

Si lo anterior no fuera suficientemente transgresora de las más mínimas garantías individuales de todo proceso o procedimiento, la recomendación pide el reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidad, sobre lo cual en la recomendación no hay ningún argumento que justifique dicha medida.

En el cúmulo de pruebas ofertadas por SPR, obra particularmente una de medular importancia para la decisión tomada por la CEDHEG, que, sin embargo, no fue valorada en su justa dimensión, se trata del expediente **TEE/OCI/PRA/06/2024**, resuelto por el Pleno de Magistrados de este Tribunal Electoral, **en el que se juzgó en un proceso formal, los mismos hechos que**

ahora determina en su recomendación la CEDHEG, el cual concluyó en la resolución que no se acreditaban las manifestaciones de transgresión a derechos de Q.

Sin embargo, respecto de dicha prueba la recomendante concluyó, bajo un examen superficial, **que no era idónea, que eran hechos distintos.**

Al efecto, sobre la aceptación de culpabilidad y responsabilidad, en el orden domestico e internacional, no existe una medida tan **equivocada, desproporcionada e ilógica**; sobre ello es preciso hacerse las siguientes interrogantes:

¿Es legal que como titular del Tribunal Electoral en un proceso no contencioso se acepte un tipo de responsabilidad por actos de un empleado?

¿Es jurídicamente viable pronunciarse sobre aceptación de responsabilidad en esta recomendación, no obstante, existe una declaración en contrario (emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en un proceso formal)? Y que, además, aun esté pendiente por resolverse en materia de amparo.

¿Sería violatorio de garantías del servidor imputado si se reconoce su responsabilidad?

¿Sería este Tribunal sujeto de responsabilidad ante esa violación flagrante al debido proceso?

¿Ese reconocimiento de responsabilidad podría tener efectos en contra del afectado si se ofrece como prueba en diverso proceso formal?

¿Es jurídicamente posible aceptar lo recomendado aun cuando falta la más mínima fundamentación, motivación y estricta valoración probatoria?

Las respuestas a las interrogantes son obvias.

La orden (en los hechos lo es) de reconocimiento de responsabilidad, **se equipara a una declaración obtenida ilegalmente**, esto es, en un proceso en apariencia no vinculatorio -como dejó sentado- ajeno a formalidades esenciales del procedimiento, como lo son en el caso, la fundamentación y motivación y el análisis estricto de las pruebas ofrecidas por las partes.

Recapitulando, la CEDHEG conforme al artículo 102 apartado B de la Constitución y a su ley reglamentaria, si bien tiene la facultad de investigar violaciones a derechos humanos provenientes de actos u omisiones de autoridades administrativas, y en su caso emitir recomendaciones no vinculantes, **sin embargo, surge la interrogante respecto a si la CEDHEG puede emitir recomendaciones contrarias a resoluciones judiciales sobre los mismos hechos y conductas.**

Las recomendaciones de la CEDHEG no son vinculantes (en apariencia). Ello significa que, aunque pueden señalar violaciones de derechos humanos, no tienen fuerza jurídica obligatoria. **Por el contrario, las resoluciones judiciales emitidas por autoridades formales sí tienen carácter vinculante y**

obligatorio. Por tanto, una recomendación no puede anular, sustituir ni contradecir una sentencia.

La Constitución establece expresamente que la CEDHEG no tiene competencia para revisar actos o resoluciones en este caso del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Su ámbito de acción se limita a los actos de autoridades administrativas. **En consecuencia, si un mismo hecho ha sido objeto de resolución judicial, la CEDHEG no puede válidamente emitir una recomendación que la contradiga.**

Lo que sí puede ocurrir es que la CEDHEG emita recomendaciones relacionadas con aspectos administrativos o conexos a los mismos hechos sobre los que recayó una resolución judicial. En tal caso, la recomendación tendría un carácter paralelo o complementario, **pero nunca podría sustituir ni invalidar lo juzgado por un tribunal.**

Existe un límite constitucional a la competencia de la CEDHEG, y es el artículo 102 apartado B constitucional, que establece que dicha institución puede conocer de quejas contra actos u omisiones de autoridades administrativas, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación y de materia electoral. Esto refuerza que la CEDHEG no puede intervenir sobre sentencias.

El caso Pasta de Conchos es ilustrativo.

El 11 de diciembre de 2024, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que la CNDH (nacional) violó el

derecho a la verdad y al acceso a la información al censurar más de 2,500 recomendaciones emitidas entre 1990 y 2015, incluidas la Recomendación 26/2006 (caso Pasta de Conchos). Posteriormente, en enero de 2025, la CNDH acató la sentencia y restituyó íntegramente esas recomendaciones. Este caso ilustra cómo una resolución judicial prevalece sobre la actuación de la CNDH.

Bajo las razones antes vertidas, con base en las consideraciones formuladas, así como en lo dispuesto por los artículos 8, 92 y 94 de Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y 174 del Reglamento Interno de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, respetuosamente la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, **no se acepta la recomendación** que se justifica y motiva, toda vez que adolece de un verdadero sustento lógico-jurídico, en el que los posicionamientos realizados por ese órgano se encuentran basados en una serie de conjeturas, realizadas mediante un análisis débil del material probatorio, alejándose con su actuar de los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad, que deben imperar en la valoración de las probanzas en la integración de los expedientes de queja que radique, transgrediendo los compromisos que su normatividad le instauran en el ejercicio de sus funciones, así como los principios rectores de todos los Organismos encargados de la promoción y protección de los Derechos Humanos.

Dada la determinación a la que se arriba, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, el presente informe será publicado en la página oficial del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, a fin de publicitación al público en general; asimismo, se notificará al Congreso del Estado de Guerrero sobre la no aceptación de la recomendación.

A T E N T A M E N T E

RUBRICA

DRA. ALMA DELIA EUGENIO ALCARAZ
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero.

SE ANEXA COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO DE 22 DE OCTUBRE DE 2019, SIGNADO POR LA PRESIDENTA Y EL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL INFORMAN SOBRE MI DESIGNACIÓN COMO MAGISTRADA DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, ASÍ COMO LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DEL 4 DE OCTUBRE DE 2024, QUE CONTIENE MI DESIGNACIÓN COMO MAGISTRADA PRESIDENTA DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL.